

SOCIEDAD CIVIL, ESFERA PÚBLICA Y DEMOCRATIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: ANDES Y CONO SUR

Aldo Panfichi
(coordinador)

Capítulo 10



Primera edición, 2002

ANDÉS Y CONO SUR y democratización en América Latina

Alfonso Pastor
(coordinador)

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra
—incluido el diseño tipográfico y de portada—,
sea cual fuere el medio, electrónico o mecánico,
sin el consentimiento por escrito del editor.

Comentarios y sugerencias: editor@fce.com.mx
Conozca nuestro catálogo: www.fce.com.mx

D. R. © 2002, FONDO EDITORIAL DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
Plaza Francia 1164, Lima 1, Perú

D. R. © 2002, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14200 México, D. F.

ISBN 968-16-6762-X

Impreso en México

FEMINISMO CHILENO EN LA DÉCADA DE 1990: PARADOJAS DE UNA TRANSICIÓN INCONCLUSIVA

MARCELA RÍOS TOBAR

PRESENTACIÓN

A más de 10 años del plebiscito que marcó formalmente el fin de la dictadura militar, el advenimiento de la democracia ha tenido resultados contradictorios para el movimiento feminista chileno. En efecto, al final de la presente década, las mujeres que protagonizaron el resurgimiento del feminismo —la “segunda ola”— y la reconstrucción de un movimiento amplio de mujeres tienen apreciaciones divergentes respecto de los resultados que ha tenido la democracia para ellas. A pesar de estas evaluaciones encontradas, no es posible ignorar una suerte de *malestar* colectivo con el devenir del movimiento durante este periodo democrático.

Por una parte, se reconoce que el feminismo —en tanto movimiento político y fuerza cultural de cambio— ha tenido un efecto notable en la sociedad chilena en su conjunto y en los cambios experimentados en la situación de las mujeres durante la última década. En términos concretos, se han intensificado los procesos de integración de las mujeres a la vida pública y se ha avanzado en la eliminación de las discriminaciones más flagrantes en el marco legal.¹ Como lo demuestra toda una batería de indicadores socioeconómicos, la integración a la esfera pública responde en gran medida a los procesos de modernización económica y social que el país ha experimentado durante las últimas décadas.² Se ha creado una institución pública responsable de promover la *igualdad de*

¹ En 1994 el Congreso aprobó la Ley de Violencia Intrafamiliar. Durante la década de 1990 se han introducido reformas en el Código Laboral para eliminar discriminaciones en contra de las mujeres en el ámbito del trabajo y ampliar sus derechos laborales; el Código Civil fue modificado para eliminar la distinción entre hijos legítimos e ilegítimos; asimismo, se eliminó el delito de adulterio que penalizaba sólo a las mujeres, entre otras medidas.

² La PEA femenina aumentó de 31.8% en 1990 a 36% en 1998. El nivel de escolaridad de las mujeres sobrepasó al de los hombres en un año (10.6 años en comparación a 9.6). El porcentaje de mujeres en situación de pobreza disminuyó en esta década desde 39.2 al 22%. La mortalidad materna se redujo a la mitad, de 0.4 a 0.2 por 1 000 nacimientos vivos.

oportunidades para las mujeres, se han elaborado planes de gobierno, firmado acuerdos internacionales y nacionales, multiplicado las oficinas y programas de la mujer en todos los ámbitos del aparato estatal (municipios, ministerios, servicios, etc.), así como en las universidades, gremios y sindicatos, y partidos políticos.

En términos generales, las demandas planteadas otrora por aisladas voces feministas han adquirido mayor legitimidad social. Hoy en día, los temas, conceptos y nociones que antes eran patrimonio de un reducido grupo de activistas e intelectuales se han masificado permeando a importantes sectores de mujeres y de la sociedad chilena (Valenzuela, 1998; Baldez, 1999). En la actualidad es común encontrar en los medios de comunicación discursos de líderes de opinión y discusiones públicas de todo tipo, conceptos y temáticas que antaño habían sido considerados tabú.

Sin embargo, a la par de estos logros, hay consenso en reconocer que se ha desdibujado la presencia pública del movimiento social de mujeres,³ incluido el feminista,⁴ en tanto fuerza política. El protagonismo y la visibilidad alcanzados en el marco del movimiento opositor al régimen militar se fue debilitando a medida que *avanzaba* la transición a un régimen democrático. Paradójicamente, las voces de las feministas se han ido extinguiendo al mismo tiempo que sus propuestas y demandas se masifican. Pareciera que a medida que avanza el discurso modernizador de la *igualdad de oportunidades para las mujeres*, desaparece el actor social y político que le dio vida originalmente. He aquí la paradoja del feminismo chileno de la década de 1990, y uno de los factores que explican el *malestar* que muchas feministas manifiestan respecto a estos años de democracia.

Hablar de movimiento feminista en la actualidad es referirse a feminismos, feministas, heterogeneidad, diversidad, y también la fragmen-

³ Utilizamos el concepto de "movimiento social" como un tipo específico de acción colectiva, como un proceso dinámico de acción, un *sistema o campo de acción multipolar* (Melucci, 1991). Un movimiento social es ante todo una construcción social frágil y heterogénea en la cual una gran gama de métodos, formas de solidaridad y organización, así como sentidos y objetivos, convergen de manera relativamente estable. Se trata de un "espacio" simbólico que incluye a los propios actores, así como su interacción social y discursiva (Ríos y Godoy, 1999).

⁴ Es importante aclarar que este trabajo está dedicado específicamente al movimiento feminista y no al movimiento de mujeres en un sentido más amplio. Se entiende por movimiento feminista el conjunto de actores, organizaciones e individuos que se movilizan o adhieren a una visión de mundo (ideales) que reconoce un sistema de dominación genérica y busca transformarlo. El movimiento de mujeres, por su parte, alude al accionar colectivo y a la movilización político-social de las mujeres (véase Valenzuela, 1998; Álvarez, 1998; Ríos, 1997; Baldez, 1999; Vargas, 1998).

tación. Conceptuar el campo de acción en el que circulan las feministas resulta hoy mucho más complejo y difuso de lo que fuera en décadas pasadas. Se amplían los espacios donde se encuentran las feministas, se diversifican los discursos, en fin, las concepciones tradicionales respecto al contenido y forma de los movimientos sociales no permiten entender las nuevas dinámicas de funcionamiento de este campo de acción (Álvarez, 1998).

El devenir de este movimiento y las transformaciones que ha experimentado han estado, sin duda, marcados por los procesos políticos y sociales vividos en el mundo y, en particular, por los experimentados en lo nacional, todo lo cual ha dado paso a un nuevo sistema de oportunidades y restricciones para la construcción y fortalecimiento de la sociedad civil, incluyendo la acción colectiva, la participación ciudadana y el desarrollo de movimientos sociales. La sociedad chilena de fin del siglo XX está lejos de la que vio emerger a los movimientos de finales de las décadas de 1970 y 1980 —entre ellos los movimientos de mujeres, derechos humanos y pobladores—. Diversos análisis han señalado que el nuevo contexto ha tenido un efecto negativo en la capacidad de estos actores para movilizar demandas y representar intereses en la esfera pública (Garretón, 1995; Drake y Jaksic, 1999). El régimen político que emerge de la transición no estimula el accionar de los movimientos y actores sociales que habían protagonizado la lucha antidictatorial; por el contrario, pareciera que su sola existencia torna obsoletas las diversas formas de organización y movilización que habían emergido durante el antiguo régimen.

La importancia de los factores político-estructurales en la relación entre Estado y sociedad civil, y en el desarrollo de los actores sociales, es indudable. Estos factores constituyen fenómenos mundiales que atraviesan nuestras fronteras y explican en buena parte la situación actual del movimiento feminista. Sin embargo, este trabajo sostiene que no es posible entender la conformación actual del campo de acción feminista como un resultado inevitable de esos factores estructurales. Entender lo que ha ocurrido con el accionar feminista en la década actual requiere, además, prestar atención a las dinámicas y procesos internos de este campo de acción que condicionan las estrategias seguidas, el tipo de relaciones establecidas con el sistema político y otros actores sociales, así como la capacidad de este conjunto de actores para encarar el nuevo contexto político y social. Es justamente la interacción entre las esferas macro y meso la que define la particularidad del accionar feminista en el Chile de hoy y, por tanto, lo distingue de procesos similares experimentados por otros actores sociales.

El presente trabajo pretende encontrar algunas respuestas iniciales respecto de dos problemáticas fundamentales. Primero, la *paradoja* que caracteriza al feminismo chileno de la década de 1990, es decir, el éxito relativo de la agenda pública en torno a la igualdad de oportunidades para las mujeres, unido a la debilidad en tanto actor político; y segundo, los factores externos e internos que explican la transformación del campo de acción feminista y el papel de cada tipo de factor en su situación actual. Se trata de analizar algunas de las interrogantes que surgen de este proceso: ¿qué explica la ausencia en la escena pública del movimiento feminista en la década actual? ¿Por qué la fuerza creativa del movimiento no se tradujo en poder político en el nuevo contexto democrático? ¿A qué factores se atribuye la falta de articulación entre los distintos sectores que antaño lograron configurarse como un movimiento social, política y culturalmente visible para el resto de la sociedad? Y ¿en qué medida la transformación del escenario político y social ha condicionado los cambios experimentados por este actor colectivo?

El trabajo está estructurado en tres secciones. En la primera se analizan los factores más relevantes del entorno político y social que han incidido en la conformación del campo de acción feminista. La segunda está dedicada al objeto de estudio propiamente tal, es decir, al *movimiento feminista*, sus orígenes y desarrollo, las transformaciones que ha experimentado durante la etapa de transición y, en especial, sus características actuales. Finalmente, se entregan algunas reflexiones a modo de conclusión.

LA SOCIEDAD CIVIL Y LA TRANSICIÓN INCONCLUSA

La trayectoria y características del proceso de transición en Chile han sido ampliamente estudiados en las últimas décadas (Garretón, 1995; Valenzuela y Valenzuela, 1986; Jocelyn-Holt, 1998; Drake y Jaksic, 1999). Es sabido que la transición en Chile, a diferencia de otros procesos del continente, no ocurrió después de una ruptura o quiebre institucional ni de una reforma pactada (Linz, 1990); por el contrario, el proceso vivido en el país estuvo claramente definido por la institucionalidad y normativa generada por el régimen militar (Constitución de 1980). En el pacto transicional participaron activamente una parte considerable de los partidos políticos, tanto de derecha, que apoyaron al régimen militar, como de centro e izquierda, que habían conformado una coalición para enfrentar el plebiscito de 1988. Sólo permanecieron al margen algunos partidos de izquierda cuya propuesta de cambio confrontacional había sido derrotada.

Desde la perspectiva de los actores sociales, resulta fundamental destacar que a partir de 1986, cuando se inicia la negociación con el régimen militar, son los partidos políticos los que retoman las riendas de la conducción del proceso político. Hasta ese momento, y sobre todo durante el periodo de las “protestas callejeras” (1983-1986), fueron los actores sociales y políticos no tradicionales los que tuvieron preeminencia. La cuestión de la conducción del movimiento opositor sigue siendo un tema de debate abierto, no obstante, el papel de los partidos políticos fue crucial, tanto en la reorganización social y emergencia de nuevos actores políticos y sociales como en el proceso de transición. En ambos casos, los partidos, a pesar de la represión y las múltiples crisis internas, lograron estar presentes en términos orgánicos y simbólico-culturales, incluso en aquellas organizaciones que aparecían más “alejadas de la política tradicional”.⁵

El “modelo chileno” (Drake y Jaksic, 1999) de transición ha generado un nuevo escenario no sólo en términos político-institucionales, sino también en términos sociales y culturales. La sociedad chilena atraviesa en todos sus ámbitos por un periodo de verdadera transición, no en el sentido estrictamente institucional, como lo había proclamado el gobierno, sino en términos de la “matriz sociopolítica misma” (Garretón, 1995), en la relación entre el Estado, el sistema de representación y la sociedad civil, en el sistema de partidos y en la representación de intereses. Paradójicamente, y al igual que en otros países de la región, el retorno a un régimen democrático —que eliminó las medidas represivas impuestas por la dictadura y abrió nuevamente la estructura de oportunidades políticas— tuvo el efecto, en el corto plazo, de reducir las oportunidades para el desarrollo de la sociedad civil y los actores que la integran.

Esto no debe entenderse como un resultado inevitable de toda transición desde un régimen autoritario a otro de carácter democrático. Por el contrario, las dinámicas y efectos de una transición están condicionados por factores específicos del sistema político y la forma como se establece la relación entre éste —con sus diversos componentes— y la sociedad civil. En cada contexto nacional los factores relevantes son múltiples, derivados de distintas dimensiones del sistema de oportunidades y restricciones políticas. En el caso chileno, postulamos que las dimensiones clave están relacionadas con las políticas y agendas de organismos in-

⁵ Algunos estudios ratifican este punto. En el caso de las organizaciones de mujeres pobladoras, si bien muchas mujeres no contaban con una trayectoria organizativa previa, una proporción importante tenía experiencia política directa como militante de partidos políticos. Este grupo constituía una minoría significativa al desempeñar papeles de liderazgo y cargos de dirigencia dentro de las organizaciones, y en los vínculos que éstas establecían con otros actores sociales y políticos (Ríos, 1994).

ternacionales y de cooperación, los rasgos culturales que lo acompañan, la cultura política imperante, el papel y características del sistema de partidos y, finalmente, las políticas públicas y gestión gubernamental concreta respecto a la sociedad civil.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL

En las últimas décadas hemos sido testigos de la creciente globalización e internacionalización de los procesos de producción de bienes y servicios, de la transmisión de información y conocimientos, así como de la construcción de agendas políticas e institucionales. Las nuevas estructuras y agendas que han ido construyendo organismos intergubernamentales no han estado relegadas a las esferas del poder institucionalizado; por el contrario, tienen un correlato en la sociedad civil.

A lo largo de estas transformaciones económicas, sociales y culturales se han ido generando redes de comunicación e intercambio que han sido identificadas como el advenimiento de una *sociedad civil mundial*. En concreto, diversos actores de la sociedad civil, y en especial las feministas, han sido capaces de articularse más allá de las fronteras nacionales, de difundir conocimientos e información, movilizarse y organizarse políticamente en tanto grupo de presión o movimiento político capaz de influir en la construcción de agendas internacionales. Las redes de comunicación creadas han logrado reproducir y ampliar las voces disidentes, posicionando así visiones alternativas e información —hasta ahora marginadas— en el centro de los debates internacionales (Álvarez, 1992, 1998; Keck y Sikkink, 1998).

Estas transformaciones han llevado a una fuerte expansión de la demanda global por un feminismo profesionalizado (Álvarez, 1998); las políticas y tendencias dentro de organismos internacionales —específicamente el sistema de Naciones Unidas— y de agencias de cooperación han avanzado en la construcción de una nueva agenda de *derechos* que incorpora, como un eje fundamental, el análisis de género. Esto ha tenido un correlato en Estado-Nación al permitir la instauración de políticas y programas orientados por esta nueva agenda de *género* y al provocar dos procesos simultáneos. Por una parte, se ejerce una presión e incentivo externo a favor de promover cambios en la situación de las mujeres, y por otra, aumenta la demanda por conocimientos expertos y especializados sobre los temas de mujer y género, tanto local como nacional e internacionalmente. Son justamente las feministas (académicas, intelectuales, técnicas) las que tienen estos conocimientos y quie-

nes son instadas a ponerlos a disposición de este nuevo proceso globalizado.

Las múltiples conferencias mundiales realizadas durante esta década se convirtieron en los escenarios privilegiados para el despliegue de esta relación de oferta y demanda de conocimientos y *know-how*. Según Sonia Álvarez, "todas las actrices del campo feminista latinoamericano han tenido que revisar las prácticas que desarrollaron originalmente para enfrentar condiciones políticas autoritarias, decididamente hostiles a la equidad de género" (1998: s. p.), para enfrentar un contexto internacional y nacional más favorable donde es posible incidir en las esferas de poder (véase también Vargas, 1998).

Por otra parte, se han modificado las políticas de las agencias de cooperación que venían apoyando la labor de organizaciones feministas durante la dictadura. En la década pasada estos organismos privilegiaron el trabajo para fortalecer la sociedad civil frente al Estado, en especial respecto a los sectores populares. Para ello se impulsaron proyectos para incentivar el desarrollo personal, el fortalecimiento colectivo, la concienciación y educación. Hoy los recursos para este tipo de iniciativas son cada vez más escasos. En la medida en que se han modificado las políticas de asignación de recursos, las organizaciones sociales y no gubernamentales han debido *adaptar* sus estrategias y misiones para sobrevivir. En la actualidad, Chile ha dejado de ser una prioridad para los organismos de cooperación. Aquellos que se mantienen en el país han reducido sus aportes y modificado sus agendas en busca de mejores niveles de rentabilidad social. Se trata de obtener resultados concretos, mejorar la focalización y atender a los problemas de extrema pobreza.

CULTURA POLÍTICA

Una segunda dimensión del sistema de oportunidades y restricciones que incide en la situación actual de los actores sociales es la *cultura política*.⁶ En ella conviven rasgos tradicionales del ordenamiento simbólico cultural nacional, con otros más recientes que se han instalado producto de la lógica de transición inconclusa.

Entre los rasgos de continuidad, Chile se ha caracterizado por tener una cultura política que valora sobremanera la formalidad institucional

⁶ Cultura política se refiere a una construcción social particular que define aquello que se considera "político" en una sociedad determinada. Se refiere a los marcos de sentidos y discursos que hacen inteligibles, legitiman y ordenan el funcionamiento de un determinado sistema político (Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998).

y el papel del Estado. De ahí que los ciudadanos esperen que la iniciativa política y la solución de todas sus demandas sean asumidas por el Estado. De acuerdo con una interpretación, en Chile existe un desfase entre las funciones que cumple el Estado —subsidiario— y la representación colectiva que la ciudadanía tiene de él. La labor de coordinación y articulación estatal entra en contradicción con la cultura política del país, donde predomina un cierto *estatismo*, en el sentido de concebir al Estado como instancia máxima de protección y conducción (Lechner y Guell, 1999). Este rasgo desincentiva el accionar colectivo ciudadano autónomo del tutelaje de los partidos y del Estado.⁷

Un segundo rasgo relacionado con el punto anterior es que la cultura política chilena tiende a legitimar el papel político de los actores más institucionalizados y cercanos a los centros de poder, desterrando a la marginalidad a los que no participan de esas esferas. Utilizando los términos de Nancy Fraser (1997), se privilegia culturalmente una esfera pública única y hegemónica, invalidando la existencia de “contrapúblicos subalternos” que sirvan de contrapeso a la esfera principal. Esto es particularmente complejo para los grupos subordinados, como es el caso de las mujeres, porque tienen mayores dificultades para tener acceso a la esfera pública institucional y generar discursos y demandas desde ahí.

La transición también ha incorporado nuevas dimensiones en esta cultura política. Una de ellas es el miedo al conflicto y la búsqueda patológica de consensos (Jocelyn-Holt, 1998; Lechner y Guell, 1999). Esto ha desincentivado la discusión pública y provocado una suerte de autocensura en aquellos sectores comprometidos con cambios más sustantivos en el sistema democrático, que por miedo a una regresión autoritaria se inhiben de plantear sus demandas con mayor fuerza.

Por otra parte, se ha argumentado que las fuerzas políticas progresistas no han sido exitosas en construir y posicionar discursos y marcos de sentidos que cuestionen la hegemonía conservadora en el plano cultural y social. En Chile, a diferencia de otros países que han vivido procesos similares de transición, no se ha logrado derrotar culturalmente el conservadurismo avanzado por los sectores más tradicionales que buscan mantener el *statu quo*, tanto en relación con el papel que ha cumplido la mujer en la sociedad chilena como respecto de una liberalización

⁷ Un estudio elaborado en el Centro de Estudios de la Mujer (CEM) encontró que la mayoría de los actores de la sociedad civil entrevistados esperan que sea el gobierno quien facilite su organización y participación en la construcción de agendas. Las organizaciones de mujeres analizadas en el estudio establecen más relaciones verticales que horizontales, es decir, privilegian su vinculación con el Estado y los partidos políticos por sobre aquella con otras organizaciones de la sociedad civil (Guzmán, Hola y Ríos, 1999).

social y política más amplia. Este bloque ha logrado imponer a la sociedad un conjunto de valores y normas que no se condicen con los procesos de modernización económica y social que ha experimentado el país. Como muchos han planteado, vivimos una "modernización sin modernidad"; el problema surge en la medida en que los sectores laicos o progresistas no han logrado construir un bloque antihegemónico capaz de legitimar otros valores y visiones de mundo y presionar una agenda que amplíe las libertades individuales y una nueva generación de derechos. Así, la hegemonía conservadora impone los parámetros del debate público a la vez que logra cuestionar y deslegitimar cualquier intento por avanzar propuestas alternativas. El debate generado en torno a la IV Conferencia Mundial de la Mujer representa un ejemplo de la forma en que estos sectores logran imponer sus posiciones (Grau, Pérez y Olea, 1997).

Tanto el miedo a los conflictos como la debilidad de un contradiscurso laico progresista han contribuido a acallar las voces feministas en el debate político público. Ya sea por miedo a la regresión autoritaria, o a generar conflictos, pragmatismo político o lo que fuere, algunas feministas parecen haber acatado los imperativos de la "nueva democracia". Según Grau, Pérez y Olea (1997), se ha producido una suerte de "acomodación discursiva" entre cada vez más actores en el campo feminista. Esta posición "consiste en que en muchos discursos se acomoda el propio perfil discursivo a los requerimientos explícitos del interlocutor involucrado en el conflicto, operando como una censura autoimpuesta. Lo anterior señala la dificultad para articular una línea argumentativa autónoma que explicita y sostenga los nudos discursivos más problemáticos: la sexualidad, la familia, el concepto de género" (Ríos y Aravena, 1997: s. p.).

EL SISTEMA DE PARTIDOS

Si existe un rasgo distintivo del sistema político chileno a lo largo de su historia, éste es el sistema de partidos políticos que emerge y se consolida en la primera mitad del siglo XX. Un sistema de partidos sólidamente establecido, tanto institucional como cultural, y profundamente enraizado en la sociedad. Antes del golpe militar de 1973, los partidos políticos monopolizaban la representación y articulación de intereses y demandas sociales. Esto aseguraba la intermediación entre Estado y sociedad, pero reducía drásticamente la autonomía de los actores sociales (Garretón, 1995). Los partidos constituían verdaderas microculturas en torno a las cuales se construían identidades colectivas e individuales. Bajo la dictadura, esta relación entre partidos y sociedad se vio erosionada. Uno

de los objetivos manifiestos del régimen militar era justamente desmantelar el sistema de partidos —sindicado como culpable de la “ingobernabilidad” en que había caído el país—. A pesar de la represión y la falta de espacios públicos, si bien no fue posible destruir el sistema de partidos, su relación con la sociedad sufrió importantes cambios y su preeminencia se vio debilitada. En la medida en que los partidos estaban proscritos y no podían operar en el ámbito público, comenzó a surgir una variedad de organizaciones sociales, ya sea para hacer frente a la crisis económica, enfrentar las violaciones a los derechos humanos, o representar y articular intereses sectoriales. La ausencia relativa de los partidos permitió mayor autonomía para estos actores sociales. El proceso de transición para reconquistar la democracia estuvo signado por una constante tensión entre partidos y actores sociales. Una vez iniciados los procesos electorales (plebiscito, elecciones presidenciales), los partidos retoman la conducción política del movimiento opositor. Vuelve la política de siempre, y con ello el intento de los partidos por monopolizar la representación y articulación de intereses, la construcción de agendas y la relación entre Estado y sociedad.

El retorno a la democracia no implica una vuelta a las formas tradicionales de hacer política. Por el contrario, las transformaciones económicas, políticas y sociales experimentadas por el país han tenido implicaciones radicales para el sistema de partidos. De acuerdo con algunos autores, “no es el retorno de los partidos políticos *per se* lo que hace que los movimientos sociales declinen”, sino la forma específica que asume la lucha por el poder en un sistema de coaliciones partidarias bipolares (Baldez, 1999). Es este juego político el que acentúa la dinámica excluyente tradicional de los partidos chilenos. En la medida en que su interés principal se vuelca hacia el Estado y la obtención del control de éste, los partidos buscan aglutinar fuerzas sociales y, por tanto, interfieren directamente con la autonomía de las organizaciones y movimientos. Por otro lado, el carácter bipolar de las coaliciones partidistas y de la lucha por el poder ha tendido a extender la lógica binominal a todo el sistema político, marginando a los partidos y actores que no pertenecen a las dos coaliciones principales. Así, tenemos que la mezcla de rasgos tradicionales del sistema de partidos (monopolio de representación de intereses) con aquéllos adquiridos en el periodo posttransición (competencia bipolar) ha resultado en un debilitamiento de los actores sociales y su capacidad de incidir en el juego político. El funcionamiento del sistema de partidos ha desincentivado la participación de estos actores en el proceso democrático.

EL ESTADO Y LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO

Diversos estudios han constatado que el papel del Estado y sus políticas constituye un factor crucial para el desarrollo de la sociedad civil así como para entender la emergencia, desarrollo y debilitamiento de los actores sociales (McAdam, McCarthy y Zald, 1996; Canel, 1992; Tarrés, 1992; Melucci, 1995). El funcionamiento del Estado es uno de los componentes centrales para la conformación del sistema de oportunidades, recursos y restricciones que enfrentan los actores sociales y que hacen posible su permanencia en el tiempo. El Estado puede incentivar o limitar el marco de oportunidades y recursos disponibles para el accionar colectivo y, por tanto, para la emergencia de actores sociales. Entre otros factores, esto depende de la capacidad y voluntad de represión estatal respecto de grupos disidentes; normas y procedimientos institucionales que regulan la conformación de organizaciones en el ámbito de la sociedad civil; las políticas y programas específicos destinados a diversos sectores y la voluntad de promover o desincentivar la participación ciudadana; los marcos de sentidos y discursos emitidos por las instituciones públicas; la apertura y legitimidad que se le otorga a la representación de intereses por parte de actores no tradicionales, así como las estrategias de inclusión o exclusión de ciertos temas y actores del debate público. No se trata —necesariamente— de que el Estado incentive o intervenga directamente en la organización de la sociedad civil, sino en el tipo de reglas de juego (oportunidades, recursos y restricciones) que genera para que ésta pueda desarrollarse.

En el Chile de la década de 1990 se fue conformando una estructura específica de recursos, oportunidades y restricciones para el desarrollo de la sociedad civil (De la Maza, 1999; Moulian, 1997; Guillaudat y Mouterde, 1998) a partir del accionar del Estado y de los gobiernos de la Concertación (discursos, políticas, programas y dinámicas de construcción de agendas públicas). Esta estructura ha afectado negativamente la emergencia y desarrollo de organizaciones sociales y, en algunos casos, ha dificultado la permanencia de diversos organismos no gubernamentales y actores sociales, producto de diversos factores interrelacionados, entre ellos, la cultura política vinculada al proceso de transición y los traumas *no exorcizados* del pasado, así como una política de consensos a puertas cerradas con un carácter crecientemente elitista.

A nivel programático, los gobiernos de la Concertación no han mostrado claridad respecto del proyecto de sociedad que buscaban para la nueva etapa democrática. Sus respectivos programas adolecían de fuer-

tes deficiencias al proponer una recomposición del tejido social, incentivar el desarrollo de organizaciones sociales y organismos no gubernamentales, o promover una mayor participación ciudadana en el sistema democrático. Durante la última década se han impulsado medidas fragmentarias y contradictorias, insuficientes en algunos casos, y directamente negativas en otros. Además de la falta de proyecto de sociedad, existen visiones distintas —y a menudo contradictorias— dentro de la coalición gobernante, y entre las diversas instituciones públicas, respecto del papel del Estado para generar las oportunidades necesarias para la participación ciudadana y el desarrollo de la sociedad civil. Esto ha sido reconocido en el propio gobierno.⁸

Además de estas consideraciones generales, es necesario analizar la relación de la institucionalidad pública con el movimiento de mujeres y con las feministas en particular. El gobierno del presidente Aylwin, como respuesta a una demanda planteada por la Concertación de Mujeres por la Democracia, creó el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) como la institución pública responsable de promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional y la igualdad de oportunidades entre los sexos. Esta institución, incluidas las políticas que coordina con otras instituciones, ha tenido incidencia en estructurar las oportunidades disponibles para el accionar del movimiento de mujeres en el periodo democrático.

Los objetivos del Sernam fueron motivo de conflicto político desde su creación. En el marco de la discusión parlamentaria sobre la ley orgánica que le daría origen, los partidos de derecha, buscando limitar el poder de esta nueva institución percibida como una concesión al feminismo, recortaron sus facultades para relacionarse con las organizaciones sociales de mujeres, circunscribiendo su misión a la coordinación de políticas públicas (Valenzuela, 1998). Desde el gobierno, a pesar de su compromiso con la creación del Sernam, siempre ha existido cierta ambivalencia y conflictos respecto del contenido de las demandas feministas. Claramente, la Democracia Cristiana, el partido hegemónico en la alianza, no tiene el mismo grado de apertura y acuerdo con esas demandas que sus socios de izquierda. En efecto, ese sector se ha mostrado abiertamente en contra de algunas demandas planteadas por las feminis-

⁸ Un documento elaborado por el Taller Interministerial de Participación en Políticas Sociales plantea que "la forma en que es concebida la participación al interior de los ministerios y servicios es disímil". Esto respondería a la inexistencia de una política gubernamental concreta en torno al tema (Mideplan y Secretaría General de Gobierno, 1995). Por lo menos dos investigaciones recientes llegan a la misma conclusión (véase Raczynsky, Serrano y Rojas, 1999; Guzmán, Hola y Ríos, 1999).

tas. Estos conflictos en la coalición gobernante también han estado presentes en el Sernam, y han marcado la forma en que esta institución se relaciona con feministas y organizaciones de mujeres (Valenzuela, 1998).

Por su parte, el Sernam no ha tenido una política clara hacia la sociedad civil (incluyendo a organizaciones sociales de mujeres y organismos no gubernamentales). La investigación realizada por el Centro de Estudios de la Mujer arroja resultados interesantes respecto de la relación establecida por la institución con diversos actores sociales y políticos. Las autoras plantean en sus conclusiones: "La estrategia de Sernam ha consistido en vincularse especialmente con aquellos actores que le transfieren poder, fundamentalmente distintos tipos de experticias en el dominio de género [...] Existen menores esfuerzos orientados a favorecer la asociatividad y participación social y política de mujeres situadas en otros espacios sociales y de generar canales de comunicación formalizados" (Guzmán, Hola y Ríos, 1999: 133).

Por otra parte, se ha producido un cambio en el papel del Estado y en la forma de implantar políticas sociales. Este cambio tiene un efecto directo en el funcionamiento de las ONG, toda vez que éstas son consideradas socias privilegiadas en el nuevo esquema y participan activamente como ejecutoras de políticas y programas. Esta participación en el *desarrollo social* ha venido a complicar la relación entre las ONG feministas y el aparato estatal, limitando los niveles de independencia de algunas instituciones y generando competencia entre organismos de la sociedad civil (Barrig, 1997).

FEMINISMO EN LOS NOVENTA: DE LA GLORIOSA HISTORIA A LA REALIDAD ACTUAL

Sin duda, la incertidumbre y el malestar irrumpen con fuerza en las voces feministas de la década de 1990. *¿Qué nos pasó, Zavalita?*, se preguntaba alguna.⁹ Otras muchas buscan respuestas, se manifiestan perplejas ante la ausencia de un referente colectivo que antaño diera sentido a su accionar, a sus ideales y pasiones. ¿Qué ha pasado con esas 20 000 mujeres que en 1989 llenaron el estadio Santa Laura para conmemorar el 8 de marzo y celebrar el retorno de la democracia? Aparentemente ausentes de la esfera pública durante los primeros años después de la transición, sólo en 1998, y a raíz de la inminente asunción del ex dictador como senador vitalicio, las feministas y otras organizaciones de mu-

⁹ Eliana Largo, "Encuentro de la Tertulia Feminista en 1996", *La Morada*.

jeros volvieron a ser visibles en las calles. Cerca de 5 000 mujeres marcharon el 8 de marzo de ese año bajo la consigna "La democracia está en deuda con las mujeres", para protestar contra lo que percibían como un símbolo de precariedad de la democracia alcanzada. Los malestares parecían evidentes.

En esta sección queremos reconstruir la trayectoria que ha seguido el feminismo chileno desde su (re)emergencia a finales de la década de 1970 hasta ahora, entender cuáles han sido sus principales hitos y describir su desarrollo a la luz de los cambios que ha vivido el país en ese mismo periodo. Queremos argumentar que si bien los factores de contexto descritos anteriormente han condicionado las oportunidades para el mantenimiento de referentes colectivos y, en cierta forma, obstaculizado los intentos de las feministas por construir una fuerza política viable, su desarticulación y desdibujamiento como sujeto colectivo contestatario en la sociedad no pueden ser atribuidos sólo a las presiones externas. Las dinámicas internas, las estrategias políticas, los discursos y opciones que las feministas han asumido durante su trayectoria como movimiento, también deben ser entendidas como factores explicativos de la situación actual.

Existe una vasta producción académica y testimonial respecto del surgimiento de organizaciones feministas bajo el régimen militar. A partir de la producción académica e intelectual de muchas feministas se ha podido reconstruir, además, la historia organizativa de las mujeres chilenas a lo largo de la historia del país.¹⁰ Estos estudios no sólo han contribuido significativamente al conocimiento en torno a las formas de organización femenina, sino que también han ampliado los temas habitualmente abordados por la historiografía. El acervo de conocimientos ha resultado en una suerte de "historia oficial" del feminismo chileno, que ha tenido como su principal exponente a Julieta Kirkwood.

Siguiendo a Kirkwood (1986), el relato colectivo coincide en señalar que el movimiento feminista se ha caracterizado por dos grandes momentos: el primero, desde comienzos del siglo XX hasta la década de 1950, orientado por la lucha sufragista; y el segundo, que va desde la década de 1970 hasta fines de la de 1980, en el cual el movimiento se plantea como opositor al régimen militar. La autora elabora una cronología en la que distingue tres etapas en la primera ola de organización feminista: de formación (1915 a 1930), ascenso (1931 y 1949) y desintegración (1949-

¹⁰ Esta producción es muy extensa. Aquí citamos sólo algunos trabajos: Kirkwood (1986); Gaviola, Jiles, Lopresti y Rojas (1986); Covarrubias (1978); Antezana-Pernet (1995); Chuchryk (1984); Frohman y Valdés (1993); Ríos (1994); Rossetti (1993); Valdés y Weinstein (1993).

1952) del movimiento. Los años posteriores a 1950, hasta la década de 1970, son caracterizados por Kirkwood como un periodo de *silencio feminista*, en el cual el problema de las desigualdades de género aparece sólo en forma secundaria. El primer periodo se extiende hasta 1931, cuando se le otorga a las mujeres el derecho a votar en las elecciones municipales y se caracteriza por iniciar —tímidamente— la lucha por los derechos cívicos. El periodo del “ascenso” marca la lucha sufragista, y es sin duda el de mayor movilización femenina que haya experimentado el país en su historia.¹¹ Una vez conquistado el derecho al voto viene la etapa del “silencio”, cuando después de una gran presencia autónoma de los grupos de mujeres, el movimiento se atomiza, se “disuelven todas las organizaciones que no fueran estrictamente de caridad o asistenciales; se abandona el concepto feminista” (Kirkwood, 1986).

Así, por más de dos décadas desaparecen las voces feministas de la esfera pública. Existe poca información sobre la acción colectiva de las mujeres durante ese periodo; lo que está claro es que no se organizaron en torno a su identidad de género. La ruptura del *silencio* feminista ocurre durante los años más oscuros de la represión militar, con el miedo y la desintegración social posterior al golpe de Estado. Se inicia entonces un proceso de rearticulación social en el que las mujeres se organizan colectivamente en todos los ámbitos de la vida nacional: dentro de la Coordinadora Nacional Sindical, de la Comisión de Derechos Humanos, en las poblaciones para enfrentar la crisis económica, en colectivos de reflexión. También comienzan a crearse organizaciones de mujeres como referentes sociales de algunos partidos de izquierda. Comienza así la articulación de un movimiento amplio de mujeres donde convergen todos estos sectores: las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones económicas populares y talleres de mujeres pobladoras, además de las organizaciones propiamente feministas.

Patricia Chuchryk (1984) señala que el 11 de agosto de 1983 se llevó a cabo la primera manifestación pública feminista de ese periodo. Un grupo de 60 mujeres se reunió en el frontis de la Biblioteca Nacional, y extendió por diez minutos un lienzo que decía: “¡Democracia Ahora! Movimiento Feminista de Chile”. Las principales organizaciones feministas creadas en ese periodo fueron el Círculo de Estudios de la Mujer, el Movimiento Feminista, Mujeres por el Socialismo, todas ellas integradas

¹¹ Entonces desempeñan un papel protagónico el Partido Cívico Femenino (fundado en 1919), el Partido Femenino Chileno (fundado en 1946), el Movimiento de Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH, fundado en 1935), el Comité Pro Derechos de la Mujer, y la coordinadora de organizaciones femeninas, la Federación Chilena de Instituciones Femeninas (Fechif).

por mujeres que en su mayoría eran profesionistas de clase media. También se crearon organizaciones feministas entre mujeres pobladoras; entre las más connotadas figuran: el Movimiento de la Mujer Pobladora (Momupo), las Domitilas y el Colectivo de Mujeres de Peñalolén.

Nace así un proyecto feminista que es ante todo una negación del autoritarismo (Chuchryk, 1991). La negación de todos los autoritarismos que permeaban la sociedad chilena, desde el brutal impuesto por el régimen militar en términos políticos, económicos y sociales, al presente en las esferas privadas de la vida familiar en todas las clases sociales. El feminismo que emerge, al igual que en el resto de América Latina, era heredero de la tradición política de izquierda; sus militantes provienen mayoritariamente de ese sector y, lógicamente, recuperan parte importante de su legado ideológico. Esta estrecha relación entre el feminismo y la izquierda política es crucial para entender el accionar y los discursos característicos de la segunda ola feminista. A diferencia de lo que ocurría en países del primer mundo, el feminismo chileno nace como un proyecto socialista, vinculando teórica y políticamente la transformación de las relaciones de dominación genérica y las estructuras sociales capitalistas. Patricia Chuchryk llama la atención sobre la enorme homogeneidad en torno a este *ethos* fundamental. Para ella, en Chile no existían corrientes feministas que se asumieran como liberales o radicales; énfasis más, énfasis menos, el grueso de las feministas se consideraba *feminista socialista*. Nadie dudaba de la necesidad de transformar el sistema capitalista como parte del proyecto emancipador en contra del patriarcado (véase Vargas, 1998).

En la práctica esto implicaba que la izquierda —en especial sus partidos— se constituyera tempranamente en una suerte de interlocutor omnipresente para el feminismo. La relación entre feministas y las estructuras y militantes de izquierda fue siempre compleja y conflictiva. Mientras algunas buscaban romper todos los lazos de conexión y defender la autonomía del movimiento a toda costa, otras buscaban conciliar su doble militancia y vincular en su quehacer político cotidiano las luchas de clase y de género. Existe escasa información en relación con las dinámicas concretas de vinculación entre las organizaciones feministas y los diversos partidos durante ese periodo; sin embargo, ambas esferas políticas estuvieron siempre relacionadas, atravesadas por un flujo constante de intercambios comunicativos, discursivos, sociales y políticos. En síntesis, para las feministas de ese periodo su lucha política fue siempre concebida como parte del movimiento opositor al régimen. Estuvo siempre marcada por los procesos políticos generales, las estrategias políticas desplegadas y los quiebres que caracterizaron a ese movimiento.

Aquí se ubica el punto de encuentro con los otros sectores del movimiento de mujeres, cuya movilización en contra de la dictadura representa el momento histórico en el cual logra consolidar su mayor grado de articulación y visibilidad en la arena pública nacional.

A pesar de representar una minoría, el feminismo proporcionó el sustento simbólico identitario para esta movilización. La consigna "Democracia en el país y en la casa",¹² acuñada por las feministas, da cuenta del papel de conducción ideológico discursivo del movimiento de mujeres. La identidad y reflexión en torno a la posición de la mujer y las relaciones de género dentro del movimiento, producto de este liderazgo feminista, fue siempre dispareja y a veces conflictiva. A pesar de la convergencia de objetivos políticos, no fue posible establecer vínculos lo suficientemente fuertes en torno a la problemática específica de género como para mantener la articulación del movimiento durante y después del periodo de transición. Los diversos conflictos, que estuvieron siempre presentes a lo largo de esta trayectoria, salieron a la luz a medida que el proceso de transición avanzaba.

Los conflictos más profundos se produjeron hacia el término de la dictadura, empero el feminismo chileno estuvo históricamente signado por rupturas profundas. De acuerdo con Manuel Antonio Garretón, "al término del régimen [militar], las fragmentaciones partidarias o las configuraciones de bloques se trasladaron a las organizaciones sociales. Se subordinaron, así, las luchas sectoriales, organizativas o reivindicativas, a una meta política máxima para la que se carecía de estrategia o pasos intermedios. Todo ello debilitó la acción colectiva que las organizaciones, carentes de verdadera autonomía, podían emprender" (1993: 416).

Existen escasas investigaciones en relación con la dinámica interna generada en el marco de la transición entre las feministas y sus organizaciones. La mayoría de los estudios de ese periodo mencionan los problemas entre "las políticas y las feministas", o entre éstas y las organizaciones de pobladoras. Sin embargo, hay poca claridad sobre cómo se inicia la creciente desarticulación dentro del campo feminista y sobre quiénes protagonizan los conflictos más agudos. Es posible señalar que las diferencias más sustantivas estuvieron siempre referidas a la elección de estrategias políticas de acción, y no a una confrontación de carácter ideológico entre distintas corrientes feministas. Esto nos remite, nuevamente, al *ethos* fundacional del feminismo chileno, es decir, a su permanente y obstinada vinculación con la política partidaria y con los proyectos políticos nacionales.

¹² Esta consigna fue creada por Julieta Kirkwood y luego adoptada por el Movimiento Feminista.

En la actualidad muchas académicas feministas han tendido a sobredimensionar e idealizar la unidad y articulación del movimiento durante ese periodo. La historia se ha vuelto a escribir a partir de la experiencia de un sector del movimiento de mujeres y del feminismo, vinculado a los partidos que llegaron a conformar la coalición que ganó las elecciones presidenciales de 1989, haciendo invisibles los conflictos y las trayectorias de otros sectores. De ahí que la mayoría de los relatos actuales sobre la transición sostengan que el movimiento de mujeres creó la Concertación de Mujeres por la Democracia para presentar sus demandas al gobierno democrático y, así, las feministas ingresaron a los partidos y al Estado, mientras otras permanecieron en las ONG. Si bien todo esto ocurrió, también es cierto que un grupo importante de feministas no estuvo de acuerdo o no se sintió convocado a participar de la Concertación de Mujeres, no se vinculó al Estado ni a los partidos una vez recuperada la democracia, y muchas de ellas optaron por estrategias individuales de marginalidad o inserción, tanto en el sistema político como en la sociedad civil. Lo importante aquí es reconocer que ha habido una multiplicidad de trayectorias feministas en la etapa de transición que han ido conformando el campo de acción actual, las confrontaciones políticas sobre estrategias a seguir y la reconstitución de una historia colectiva.

El movimiento feminista ha experimentado una profunda transformación durante las últimas dos décadas. Las formas tradicionales de organización y movilización política se debilitan o modifican a la vez que emergen nuevas dinámicas y estructuras orgánicas y discursivas. En la actualidad, resulta más acertado hablar de un campo de acción construido a partir de intercambios comunicativos y simbólicos, prácticas político-sociales concretas, así como estrategias de movilización; se trata de un campo de acción "expansivo, policéntrico y heterogéneo que se extiende más allá de las organizaciones o grupos propios de un movimiento" (Álvarez, 1998); para esta autora, se han multiplicado los espacios donde las mujeres que se dicen feministas actúan o pueden actuar, "ya no es sólo en las calles, los colectivos de autorreflexión autónomos, los talleres de educación popular, etc. Si bien las feministas continúan en esos espacios, hoy se encuentran además en una amplia gama de terrenos culturales, sociales y políticos: en los pasillos de la ONU, en la academia, las instituciones públicas, los medios de comunicación, los organismos no gubernamentales entre otros" (1998: s. p.).

Al mismo tiempo, las estructuras orgánicas y discursos feministas, las estrategias políticas y la articulación entre diversos actores han experimentado cambios significativos en este periodo. El nuevo campo de acción, si bien ha diversificado y ampliado el accionar feminista propia-

mente como tal, ha tenido el efecto paradójico de tornar ese accionar menos visible para el resto de la sociedad. A continuación analizaremos las principales tendencias de continuidad y cambio en el campo de acción feminista en el Chile de la década de 1990.

La ampliación discursiva del feminismo

Durante las últimas dos décadas, los discursos, conceptos y debates feministas que habían estado circunscritos al movimiento opositor y, sobre todo, a los espacios propios del movimiento, han sido crecientemente incorporados en los discursos y agendas de la sociedad chilena. Hoy en día, los discursos y demandas feministas han sido apropiados por mujeres en diversos espacios y sectores de la sociedad, y reciben atención en los medios de comunicación en círculos académicos, en debates políticos. La variedad de espacios y esferas donde transitan estos discursos también han venido aumentando. Por otra parte, mientras en décadas pasadas el accionar feminista estaba concentrado en los grandes centros urbanos (Santiago, Valparaíso, Concepción), hoy en día encontramos feministas activas en diversos puntos del país, ya sea vinculadas a ciertas instituciones o actuando desde sus proyectos individuales. Esto ha resultado en la pérdida de un foco geográfico y temático único, surgiendo una multiplicidad de microfocos de acción tanto en el ámbito local como regional y nacional.

Así, nos encontramos ante un fenómeno de creciente expansión y diversificación de las temáticas y espacios de accionar feminista, especialmente en comparación con el periodo anterior. Patricia Chuchryk (1984) plantea que a mediados de la década de 1980 no había más de 200 o 300 mujeres que se identificaban como feministas en todo el país, y la gran mayoría estaba concentrada en Santiago en organizaciones y espacios claramente identificables; hoy en día es imposible calcular el número de mujeres que se dice/siente/adhiere al feminismo en el país. Podemos encontrarlas a lo largo del territorio en una variedad de espacios y organizaciones; muchas de ellas se identifican abiertamente con el feminismo, mientras otras —individual o colectivamente—, sin identificarse como tales, se movilizan para mejorar la situación de las mujeres y transformar las relaciones desiguales entre los sexos. Todo un éxito para el feminismo. No obstante, esta masificación confronta a las feministas a nuevos y más complejos desafíos en relación con la circulación de información y conocimientos, así como con la articulación entre los diversos componentes del campo de acción.

Una segunda característica relacionada con la anterior es la creciente multiplicidad discursiva y programática. Es decir, el accionar académico y político, así como la articulación entre feministas, se dan cada vez más en torno a temas específicos y no en función de un proyecto global de cambio. Hoy en día asistimos al surgimiento de un sinnúmero de temáticas y microproyectos orientados a resolver demandas concretas y a movilizarse en torno a identidades específicas. Se trata de la especialización de organizaciones y redes en ciertos temas —como la violencia doméstica, los derechos reproductivos y sexuales, la feminización de la pobreza, los derechos de las mujeres, entre otros—, así como la movilización de ciertos grupos de mujeres en torno a sus identidades étnicas, de clase o de otro tipo.

Se trata de una creciente multiplicidad de intereses, identidades y proyectos dentro del campo feminista y, como correlato, del debilitamiento de un proyecto único capaz de articular y movilizar al conjunto (o mayoría) detrás de un solo objetivo. Este proceso nos remite nuevamente a un escenario complejo y, en cierta medida, contradictorio. La pluralidad y heterogeneidad da lugar a una creciente participación de grupos y sectores de mujeres que en épocas anteriores no se habían movilizado en función de su identidad genérica, permitiendo entonces legitimar y hacer visibles las demandas, discursos y especificidades de estas mujeres y de su vivencia de género. Sin embargo, esta pluralidad también ha implicado una creciente fragmentación y falta de articulación entre los diversos sectores y componentes del campo de acción feminista. Cada grupo, cada red, se moviliza por sus objetivos específicos, organiza sus acciones, elabora discursos, estrategias, propuestas, sin que éstas sean necesariamente potenciadas, informadas, coordinadas con las que otras mujeres y organizaciones plantean. Existe un diálogo muchas veces deficiente y conflictivo entre los diversos sectores y, por tanto, una baja capacidad para movilizarse y actuar por ciertos temas o problemas de interés para todas. Lo anterior es indicativo del fenómeno mundial de debilitamiento de los grandes proyectos de cambio social, mientras devienen centrales la construcción de identidades y demandas particulares (Fraser, 1997: Introducción).

Transformación política-ideológica

El resurgimiento del feminismo en Chile estuvo estrechamente vinculado a un proyecto de cambio social de carácter socialista y, por tanto, con una clara orientación antisistémica. Este vínculo entre feminismo y

socialismo se ha ido debilitando paulatinamente durante las últimas décadas, tanto por el distanciamiento de los feminismos de sus orígenes en la izquierda marxista como por la renovación ideológica en la izquierda política y la transformación mundial producida después de la caída del muro de Berlín. Hoy en día debemos hablar de feminismos en plural, con una multiplicidad de posturas político-ideológicas que van desde el feminismo liberal al radical, pasando por una amplia gama intermedia.

La segunda ola feminista debió enfrentar el orden político institucional y el modelo económico implantado por la dictadura militar. Frente a un régimen autoritario que no ofrecía espacios ni incentivos para el diálogo ni la participación, y utilizaba la represión como arma de disciplina política, la necesidad de articulación y cohesión entre las feministas resultaba evidente. Sin embargo, una vez que el contexto político cambia a raíz de la transición, y el "enemigo común" desaparece, tal vocación antisistémica ha dejado de desempeñar un papel articulador para el movimiento. Por el contrario, si bien muchas feministas manifiestan insatisfacción con el tipo de democracia que se ha construido, no hay unanimidad de criterios sobre la posición que debe tomarse frente a la institucionalidad política o el modelo económico. Mientras algunas han participado activamente de los gobiernos de la Concertación, otras mantienen posiciones críticas y de oposición a las políticas impulsadas por ellos.

Modalidades de organización: continuidad y cambio

Estrechamente vinculado a los procesos antes descritos, se han ido modificando las formas de organización que las feministas habían generado para canalizar su accionar. Las organizaciones informales, colectivos y talleres característicos del accionar movimentista en la década pasada, fueron dando lugar a otras modalidades de acción colectiva y a una creciente diversificación en el tipo de espacios donde se encuentran las feministas. Uno de los factores que ha incidido en dichas transformaciones está relacionado con los cambios en las propias organizaciones, en términos de sus objetivos, estructura, membresía, estrategias políticas y formas de articulación con otros actores sociales. En primer lugar, se ha producido una creciente profesionalización e institucionalización de los espacios colectivos de antaño. Parte importante de las organizaciones feministas que emergieron durante la dictadura mostraron una tendencia temprana a institucionalizar su quehacer mediante su conformación legal, formalización de procedimientos internos y especiali-

zación de las acciones que venían realizando. Se trataba de dar estabilidad y permanencia en el tiempo a las organizaciones, asegurar su sobrevivencia frente a las rápidas transformaciones sociales y económicas e incrementar el efecto de sus acciones en la sociedad chilena en su conjunto. Muchas organizaciones que habían nacido como grupos de reflexión o movilización política consideraron como un paso necesario en su desarrollo la conversión a organismos no gubernamentales. Esta tendencia ha sido denominada como la *ongización* del feminismo (Álvarez, 1997), y es, sin duda, un fenómeno presente en toda América Latina (véase Barrig, 1997).

En la actualidad los organismos no gubernamentales representan una de las expresiones organizativas más comunes en el campo de acción feminista. En este tipo de modalidad hay una gran diversidad de esquemas institucionales, formas de funcionamiento, estrategias políticas y de composición. Las ONG no representan un tipo organizativo homogéneo ni unidimensional, de ahí que cualquier esfuerzo analítico para entender el quehacer feminista en la década de 1990 deba dar cuenta de esta pluralidad de expresiones y de la forma en que las diversas organizaciones se relacionan entre sí.¹³

Además de los organismos no gubernamentales, existe gran variedad de organizaciones sociales de mujeres; algunas de ellas se identifican a sí mismas como feministas, mientras otras, si bien están comprometidas con el desarrollo y empoderamiento de las mujeres, no asumen una postura feminista explícita. Entre estas organizaciones se encuentran las llamadas *casas de la mujer*. Este tipo de organizaciones surge a finales del régimen militar, inicialmente con el apoyo de organismos internacionales y agencias de cooperación, con la propuesta de proporcionar espacios, infraestructura y recursos para la organización de las mujeres en el ámbito local. Se trata, fundamentalmente, de lugares de encuentro para mujeres de sectores populares; en ellos se realizan talleres de autoestima y desarrollo personal, cursos de capacitación laboral, jornadas y encuentros de reflexión, así como una variedad de programas de autoayuda y desarrollo social.¹⁴ Durante esta década, el papel y carácter de estas instancias se ha ido modificando en la medida en que el Es-

¹³ Es escasa la investigación empírica sobre este fenómeno. Sin embargo, y de acuerdo con el directorio de organismos no gubernamentales señalados en la *Guía Silver*, 1999, existen por lo menos 24 ONG a lo largo del país dedicadas exclusivamente a las temáticas de mujer o género, y 16 programas en las ONG vinculadas a proyectos de desarrollo en general. Para una discusión en mayor profundidad sobre las ONG de mujeres en Chile, véase Barrig (1997).

¹⁴ La *Guía Silver*, 1999, incluye 20 "casas de la mujer" en nueve ciudades del país (12 ubicadas en Santiago).

tado —especialmente a través de los municipios— ha contribuido en su creación y financiamiento. Al igual que en el caso de los organismos no gubernamentales, estas organizaciones muestran diferencias significativas entre sí, ya sea por su relación con el Estado, en sus objetivos, formas de organización o adscripción a una identidad feminista. Su tipificación como parte del campo de acción feminista sigue siendo un tema de debate; sin embargo, es importante reconocer la labor que ellas realizan para promover la organización y mejoría en las condiciones de vida de las mujeres populares.

Otra de las formas de organización importantes dentro del campo de acción feminista son las redes temáticas. Ellas han logrado consolidarse como una nueva forma de organización/acción feminista comprometida con el establecimiento de vínculos interinstitucionales y transnacionales. En la actualidad hay por lo menos siete de esas redes, compuestas por organizaciones sociales, organismos no gubernamentales e individuos, en torno a los temas de violencia doméstica y sexual, derechos reproductivos, salud, derechos de las mujeres, educación, información de las mujeres, entre otros.¹⁵

En otro ámbito, la instalación de programas académicos de estudios de género en diversas universidades e institutos de educación superior a lo largo del país refleja la creciente legitimidad social y política que ha adquirido la construcción social de las relaciones de género como un asunto público. Este proceso representa una expresión más de la apertura social y cultural propiciada por la transición a un régimen democrático. En la medida que avanzaba la democratización política en el país, las esferas académicas han ido transformándose para adecuar sus estructuras a los nuevos requerimientos de la sociedad chilena e incorporar aquellos debates, discursos y conocimientos que habían estado excluidos de la academia durante la dictadura. A finales de la década de 1990 existían por lo menos 14 programas académicos de género en 13 universidades públicas y privadas a lo largo del país (siete ciudades distintas); la mayoría de esos programas se encuentran en las facultades de ciencias sociales o humanidades, combinando actividades de docencia e investigación. Tienen, a su vez, recursos humanos y materiales muy disímiles entre sí, así como diversos grados de legitimidad y estabili-

¹⁵ Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red de Información de los Derechos de la Mujer (Ridem), Red Latinoamericana de Salud de la Mujeres, Red de Comunicación Alternativa de la Mujer en América Latina (Fempres), Red Feminista Latinoamericana y del Caribe contra la Violencia Doméstica y Sexual y Red de Educación Popular (Repem). Asimismo, existen redes de organizaciones sociales de mujeres, tales como la Red de Organizaciones Sociales de Mujeres (Remos), Asociación de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri).

dad en sus respectivas instituciones. Es importante destacar que son mujeres académicas las que han creado estas instancias y que, a diferencia de lo que ocurre en muchos organismos no gubernamentales, estas profesionales no tienen necesariamente una trayectoria de activismo político clásico dentro del movimiento.

A pesar de los numerosos cambios, también es posible encontrar una continuidad en relación con las modalidades tradicionales de organización movimentista. Se trata de organizaciones caracterizadas por procedimientos y estructuras menos formalizadas, con diversos grados de cohesión y estabilidad en el tiempo, y con una clara identificación identitaria con el feminismo. Entre ellas es posible reconocer dos claras tendencias. Por un lado, existen grupos feministas vinculados a la "corriente autónoma",¹⁶ y por otro, grupos que se definen como feministas pero que no se adscriben necesariamente a una corriente ideológica específica.¹⁷ En el caso de estos últimos, muchos constituyen nuevas organizaciones y colectivos conformados por mujeres de generaciones distintas a las de las militantes *históricas*.

Si bien persisten ejemplos de este tipo de organizaciones, la tendencia global en estos años ha estado marcada por su desarticulación. El escenario político feminista evidencia la falta de referentes colectivos de coordinación política, de colectivos de reflexión/acción, de organizaciones sociales estructuradas sobre la base de la participación voluntaria de sus miembros; en síntesis, la falta de espacios para la militancia social y política entendida en la acepción más clásica. La desarticulación de este tipo de espacios fue particularmente severa durante los primeros años del régimen democrático. Si bien no existe información fidedigna sobre el número y tipo de organizaciones activas en la etapa previa a la transición, diversas fuentes señalan que su disminución inicial fue impresionante. Finalmente, un gran número de feministas ha optado por estrategias individuales. Las feministas *sueeltas* o independientes representan diversas trayectorias individuales de inserción en diferentes ámbitos de la vida nacional.

¹⁶ La Comisión organizadora del VII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe estaba compuesta por estas organizaciones. Algunos de los grupos que se mantienen en la actualidad son los Colectivos Clorindas y Agridulce, Movimiento Feminista Autónomo y Movimiento por la Autonomía, entre otros.

¹⁷ Tal es el caso de los Colectivo Feminista Bajo Sospecha en Santiago, Kaleidas en Valparaíso, Enredadas en Valdivia, entre otros.

La resignificación del campo de acción feminista

Los cambios en las formas de organización y estructuración del accionar colectivo feminista no han sido las únicas transformaciones dentro de este campo de acción. Por el contrario, se han venido desarrollando procesos políticos que han incidido fuertemente en la modificación de lo que se había considerado como un movimiento social.

Una de las tendencias de cambio se refiere a la creciente profesionalización y especialización de las organizaciones feministas. La demanda nacional e internacional por la experticia de género, así como los nuevos desafíos impuestos por los procesos de democratización, han estimulado la profesionalización y especialización tanto de activistas como de académicas y toda la gama de organizaciones a las que pertenecen. La necesidad de aportar conocimientos, información y propuestas concretas para abordar la inequidad de género desde el Estado y otros organismos ha llevado a muchas feministas y sus organizaciones a especializarse y concentrar sus energías en estrategias de "cabildeo" y promoción política de ciertas temáticas. Desde estos ámbitos se requiere cada vez más la participación de profesionales debidamente preparadas, y no la de militantes voluntarias para la construcción de agendas de género, programas y proyectos de desarrollo. Asimismo, los imperativos de una economía de mercado y la falta de políticas para estimular el financiamiento local de organizaciones sociales y no gubernamentales (como también la crisis de financiamiento que sufre la educación universitaria) estimulan la profesionalización de muchas organizaciones feministas que deben sobrevivir elaborando proyectos para gobiernos y agencias de cooperación internacional.

Ambos procesos —institucionalización y formalización, y profesionalización— han transformado de manera admirable el accionar feminista durante la década de 1990. Ellos han contribuido a producir conocimientos e información necesaria para legitimar las demandas y propuestas feministas, así como adecuar discursos y propuestas a la compleja realidad de una sociedad que enfrenta un proceso de modernización vertiginoso. Por su parte, el aumento en la capacidad de negociación y cabildeo en diversos espacios político-institucionales ha contribuido al éxito relativo en la inclusión de demandas feministas en las agendas públicas e institucionales en el periodo postransición.

Sin embargo, los mismos procesos han tenido efectos contradictorios en las dinámicas internas de las organizaciones feministas y para la articulación entre ellas. La necesidad de formalizar y profesionalizar el quehacer de muchas organizaciones ha significado —en la práctica—

que esos espacios están reservados para las activistas profesionales, pioneras en ese trabajo en décadas pasadas. En la medida en que estas organizaciones se profesionalizan e institucionalizan, se cierran los canales tradicionales de reclutamiento e inclusión de mujeres de generaciones y procedencia distinta a las activistas *históricas*. Asimismo, las redes de comunicación e intercambio de información se construyen a partir de relaciones entre organizaciones o en circuitos académicos y profesionalizados relativamente restringidos.

A la par de estos procesos de profesionalización e institucionalización, en los últimos años se han debilitado los lazos comunicantes y articulaciones entre los diversos componentes e individuos que circulan en el campo de acción feminista, y entre éstos y otros actores de la sociedad civil comprometidos con la profundización democrática. Si bien el campo de acción siempre ha sido heterogéneo en su composición, durante el periodo anterior fue posible mantener articulaciones en torno a un proyecto político común enfrentado a una crisis política y social generalizada. Hoy, después de recobrada la "normalidad", no parece posible retomar los ejes articuladores y superar las rupturas históricas en pro de la movilización conjunta. Las feministas —seltas, juntas, institucionales o no— se encuentran disgregadas actuando desde sus diversas "posiciones de sujeto" y esferas organizativas, desde sus experiencias e identidades específicas. Las feministas ubicadas en las diversas modalidades organizativas raramente se encuentran para reflexionar, debatir o dialogar.

Los cambios en las estrategias políticas representan una tercera tendencia que ha contribuido a la resignificación del accionar feminista durante la década de 1990. Si bien las opciones estratégicas que las feministas han ido asumiendo están seriamente constreñidas por el entorno político institucional y las oportunidades y recursos que éste ofrece, el espacio para maniobrar, para la *agencia*, sigue estando presente. Las coyunturas políticas e históricas siempre ofrecen campo para la opción de estrategias y la modificación de cursos de acción. Así, las estrategias y opciones que diversos sectores feministas (e individuos) han adoptado durante el periodo de transición han tenido un efecto significativo en modificar el carácter y papel del feminismo en el Chile actual.

Un sector importante del movimiento, en su mayoría ubicado en instancias formales (ONG, universidades, partidos, etc.), ha seguido una estrategia relativamente coherente desde los inicios de la transición hasta ahora. Esto es, incidir en la construcción de agendas políticas e institucionales en todos los ámbitos de la sociedad que fuera posible, especialmente en las agendas gubernamentales e internacionales. Este sector optó en primer lugar por conformar un referente político que permitie-

ra plasmar las demandas del movimiento de mujeres en el programa del primer gobierno de la Concertación; y, una vez instalado el nuevo régimen, ha buscado participar del diseño e instauración de las políticas impulsadas por los gobiernos democráticos, incidir en los procesos internacionales en pro de los derechos de las mujeres y establecer alianzas y redes con mujeres en el resto de América Latina y el mundo para fortalecer sus capacidades de negociación e incidencia.

La opción por incidir en la construcción de agendas ha estado estrechamente vinculada a la necesidad de mejorar las capacidades técnicas y políticas de las feministas y sus organizaciones: profesionalización y especialización. El correlato de esta estrategia ha sido el abandono relativo del trabajo de concienciación y movilización de las mujeres, característico de la etapa anterior. Varios estudios han constatado cambios en el tipo de proyectos y acciones que realizan las ONG de mujeres (Barrig, 1997; Álvarez, 1998). Lo que ha ocurrido es una readecuación de las misiones institucionales para ajustarse a las demandas del entorno nacional e internacional. Los incentivos para este cambio no se remiten sólo a aquellos proporcionados por los Estados y organismos internacionales; las agencias de cooperación también han desempeñado un papel fundamental al cambiar sus políticas de asignación de recursos.

Por su parte, otros sectores feministas, en especial aquellos que no participaron del pacto transicional, no han tenido el mismo nivel de coherencia en su selección de estrategias. Éstos no han logrado generar un proyecto alternativo o contrahegemónico a la ruta institucional. La diversidad de trayectorias, experiencias y posiciones es tal que no sería posible hablar de una tendencia homogénea, equivalente a la seguida por el grupo de mujeres que ha optado por incidir en las agendas institucionales. Sin embargo, a pesar de esta heterogeneidad, aparecen algunas tendencias entre estos sectores.

El ejemplo más conocido es el proyecto impulsado por la corriente autónoma antes mencionada. Estas feministas han optado por permanecer al margen (o a espaldas) del sistema político institucional, vinculándose principalmente con otros grupos y actores antisistémicos, en su mayoría de izquierda y con un marcado discurso de clase. Su propuesta política ha estado orientada a fortalecer espacios "autónomos" de acción política feminista para fortalecer el movimiento en tanto actor social. En la práctica, una de las principales dificultades en este sector ha sido su extremado dogmatismo y rigidez política, que ha resultado en múltiples conflictos internos y el consabido debilitamiento de sus organizaciones. Su mayor éxito durante este periodo ha sido su capacidad de incidir en los discursos y debates al interior del campo de acción femi-

nista y de generar una corriente de opinión regional. El momento de mayor preeminencia de esta corriente se manifestó en el VII Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (1996), organizado en Chile por feministas autónomas.

Otras feministas, ubicadas en toda la gama de organizaciones mencionadas anteriormente, han mantenido las estrategias clásicas de trabajo de desarrollo de conciencia y educación de las mujeres, generando lazos tanto con el Estado como con otros sectores sociales. La mayoría de estos grupos se ha dedicado a temas específicos, como la violencia doméstica, los derechos reproductivos, la capacitación laboral, entre otros, y se ha mantenido relativamente al margen de la disputa ideológica entre "autónomas e institucionales".

Asimismo, muchas mujeres que se identifican con el feminismo desarrollan su accionar político y social en esferas culturales, ya sea en el mundo de las comunicaciones —manteniendo medios de comunicación alternativos, programas de radio, boletines, revistas, entre otros—, o en el mundo de la cultura y las artes, creando, interpretando, expresando sentires y saberes feministas desde lógicas no políticas, pero no por ello menos relevantes para una propuesta de cambio social. De acuerdo con algunas autoras, es justamente esta creación artística la única forma de fortalecer el feminismo en nuestra era, "no se puede inaugurar un mundo nuevo sin palabras nuevas, sin formas nuevas" (Collin, 1999: s. p.).

REFLEXIONES FINALES

En este trabajo hemos revisado los procesos y tendencias que han marcado el desarrollo del movimiento feminista chileno en el periodo postransición. Hemos argumentado que existe una suerte de paradoja, toda vez que se han masificado los discursos y propuestas feministas y se han obtenido logros relativos en la construcción de agendas institucionales; empero, al mismo tiempo, se produce un notorio debilitamiento del feminismo en tanto actor social.

Hemos explicado que la supuesta paradoja que enfrenta el feminismo chileno en este periodo es producto de la interacción entre el sistema de oportunidades y restricciones políticas, y las dinámicas internas que ha desarrollado el movimiento. Así, el funcionamiento del sistema político que hemos descrito ha estimulado y favorecido la participación de las activistas feministas de la sociedad civil en los procesos de construcción de las agendas públicas e institucionales. Tanto la extensión de discursos de derechos e igualdad de oportunidades en esferas gubernamentales

mentales, a nivel nacional e internacional, como el proyecto modernizador de los gobiernos de la Concertación, han privilegiado una relación con actores de la sociedad civil en su calidad de expertos técnicos, y no en tanto ciudadanos o actores políticos.

De esta forma, el contexto internacional ha incidido directamente en la reconfiguración del campo feminista, en las estrategias políticas adoptadas y en la capacidad de mantener autonomía respecto del sistema político institucional. Por su parte, el accionar del Estado chileno y de los gobiernos democráticos durante la década de 1990 han contribuido al proceso de pérdida de visibilidad y fuerza política que ha experimentado el movimiento feminista. Su falta de una política clara respecto de la sociedad civil, la disminución de incentivos para el desarrollo de organizaciones sociales y la participación ciudadana, así como su legitimación selectiva de interlocutores válidos, han sido factores relevantes en la transformación del campo de acción feminista. Al reconocer como interlocutor válido sólo a un sector del feminismo, el gobierno chileno ha acentuado las pugnas internas y conflictos al interior de ese campo, y marginado de los debates públicos a otros sectores —invisibilizando su existencia para el resto de la sociedad.

La reconfiguración de las relaciones entre Estado y sociedad civil, las políticas gubernamentales que inciden en las oportunidades disponibles para el desarrollo de los actores sociales, así como la cultura política imperante, han generado condiciones poco favorables para la movilización social. Las condiciones políticas y sociales en el Chile postransición han contribuido a debilitar los vínculos entre actores intermedios de la sociedad civil (ONG, gremios, sindicatos, etc.) y organizaciones sociales de base, o los ciudadanos a quienes esos actores buscan representar o promover.

Estos procesos externos disparan aquellos que se han venido desarrollando dentro del movimiento feminista, al mismo tiempo que convergen con ellos: ampliación temática y discursiva, profesionalización y especialización, institucionalización, debilitamiento de los lazos de vinculación y articulación, y cambios en las estrategias políticas privilegiadas.

Uno de estos procesos internos se refiere al debilitamiento de los hilos articuladores al interior del movimiento. Si bien el feminismo nunca fue un actor unificado, homogéneo, ni exento de conflicto, había logrado alcanzar altos niveles de articulación y cohesión en torno al objetivo común por reconquistar la democracia e incidir en los contenidos que ésta asumiría. Una vez que desaparece el sustento fundamental para la unidad, los quiebres se tornan inminentes, toda vez que se produce una ruptura en el *ethos* que había caracterizado al feminismo chileno y lati-

noamericano: su identificación con el socialismo. Emerge entonces una multiplicidad de posturas ideológicas, sin que ninguna de ellas logre constituirse en referente orgánico con capacidad de articular y movilizar sectores importantes del movimiento.

Finalmente, el debate entre autonomía e institucionalización se ha sumado a los *clivajes* históricos y representa, en última instancia, una nueva discusión respecto de las estrategias políticas a seguir entre sectores marginados y otros incluidos del sistema político. La imposibilidad de manejar estos *clivajes* en forma constructiva, como expresiones de la diversidad y riqueza de los feminismos de fin del siglo XX, y no como quiebres insoslayables que impiden la construcción de alianzas y la acción conjunta en determinadas coyunturas, explica en gran medida la incapacidad del feminismo de constituirse en una fuerza política visible.

Por otra parte, el feminismo de la década de 1990 está fuertemente marcado por las dinámicas de funcionamiento presentes en tres de las modalidades orgánicas más significativas de este periodo, éstas son: los organismos no gubernamentales, los programas de género en universidades y las redes temáticas. Dinámicas de funcionamiento cuyo resultado redundaba en logros relativos en la construcción de agendas y en la debilidad de este tipo de espacios para convocar y abrir canales de participación democrática para sectores más amplios de mujeres, y para generar lazos estables con otros actores sociales y políticos. En ambos casos se trata de una dificultad para impulsar la movilización política desde la sociedad civil.

De esa manera, las transformaciones en las modalidades de organización, y en especial la creciente tendencia a la institucionalización, han dificultado que mujeres que hasta ahora no han participado del campo de acción feminista puedan tener acceso a él. En la actualidad, la información, conocimientos, discursos y articulaciones entre feministas permanecen reservadas para las "iniciadas". Una red o campo de acción se construye y fortalece entre mujeres que de algún modo participaron de la reemergencia del feminismo en décadas pasadas, dificultando, por tanto, el ingreso de nuevas generaciones de mujeres y de aquellas con trayectorias y procedencias distintas (Bellesi, 1999). El desafío pendiente es: ¿cómo abrir espacios para las nuevas generaciones, pero también para aquellas mujeres que comienzan a buscar un referente que las identifique? (Ríos y Guerrero, 1998).

En la medida en que parte importante de las feministas ha buscado adecuar sus estrategias y propuestas al nuevo escenario nacional e internacional, en especial para incidir en la construcción de agendas, se ha producido una suerte de abandono de la movilización y presión política

más clásica. Se ha privilegiado, por tanto, “la ampliación de algunas dimensiones políticas de las ciudadanías, descuidando los contenidos ‘de disputa’, diluyendo las exigencias de institucionalidad democrática, descuidando las estrategias de transformación político-culturales y los espacios contestatarios desde la sociedad civil” (Vargas, 1998). De acuerdo con Virginia Vargas, esto constituye un peligro en tanto se vislumbra un “desdibujamiento de la agenda propia”, lo cual a su vez debilita la posibilidad de alimentar una base social amplia en la sociedad civil, capaz de acompañar y presionar por los cambios políticos y culturales necesarios para modificar el orden patriarcal.

La reconfiguración del campo de acción feminista representa un desafío teórico y político para todos aquellos interesados en fortalecer la sociedad civil *vis a vis* el Estado y avanzar en la democratización de nuestras sociedades. Si bien se han obtenido avances respecto de ciertas demandas impulsadas por las feministas en décadas pasadas, las tendencias actuales nos enfrentan a desafíos complejos. Reconociendo la imposibilidad de reconstruir las estrategias y escenarios de antaño, rechazando la añoranza platónica de un pasado idealizado, ¿es posible contar con actores sociales contra hegemónicos, con la fuerza política necesaria para impulsar un proyecto democratizador desde la sociedad civil? Considerando la heterogeneidad del campo de acción feminista, la multiplicidad de expresiones orgánicas, de discursos, identidades y su creciente fragmentación, ¿podemos esperar respuestas políticas frente al avance de las fuerzas conservadoras que buscan revertir los avances logrados en la situación de las mujeres en nuestros países? Las nuevas estrategias y dinámicas políticas al interior del campo feminista nos llaman la atención sobre éstas y otras interrogantes. Sin duda, la forma en que las propias feministas asuman el desafío actual será la clave para el futuro de este actor político y de su capacidad para incidir en los procesos de transformación social y política en marcha.

BIBLIOGRAFÍA

- Álvarez, Sonia y Arturo Escobar, *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, strategy and democracy*, Boulder, Westview Press, 1992.
- , Evelina Dagnino y Arturo Escobar, *Cultures of Politics, Politics of Culture: Re-visioning Latin American Social Movements*, Boulder, Westview Press, 1998.
- , “Los feminismos se globalizan en los noventa: retos para un nuevo milenio”, en prensa [1998].

- Álvarez, Sonia, "Feminismos latinoamericanos: reflexiones teóricas y perspectivas comparativas", en *Reflexiones teóricas y comparativas sobre los feminismos en Chile y América Latina*, Santiago, Notas del Conversatorio, 1998, s. p.
- Antezana-Pernet, Corinne, "El MEMCH en provincia. Movilización femenina y sus obstáculos, 1935-1942", en Godoy, Hutchison, Roseblatt y Zárate (comps.), *Disciplina y desacato. Construcción de identidad en Chile, siglos XIX y XX*, Santiago, SUR-CEDEM, 1995.
- Baldez, Lisa, "La política partidista y los límites del feminismo de Estado en Chile", en Paul Drake e Iván Jaksic (comps.), *El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa*, Santiago, LOM, 1999.
- Barrig, Maruja, *De cal y arena: ONGs y movimiento de mujeres en Chile*, Santiago, mimeo, 1997.
- Bellesi, Diana, "Todas íbamos a ser ancianas indecentes...", Fempress, *Feminismos fin de siglo*, Santiago, Fempress, 1999.
- Canel, Eduardo, "New Social Movement Theory and Resource Mobilization: The Need for Integration", en W. Corroll (ed.), *Organizing Dissent: Contemporary Social Movements in Theory and Practice*, Toronto, Garamond, 1992.
- Chuchryk, Patricia, *Protest, Politics and Personal Life: The Emergence of Feminism in a Military Dictatorship, Chile 1973-1983*, tesis doctoral, York University-Toronto, 1984.
- Collin, Françoise, "Una herencia sin testamento", Fempress, *Feminismos fin de siglo*, Santiago, Fempress, 1999.
- Covarrubias, Paz, "El movimiento feminista chileno", en Franco y Paz Covarrubias (comps.), *Chile, mujer y sociedad*, Santiago, UNICEF, 1978.
- De la Maza, Gonzalo, "Los movimientos sociales en la democratización de Chile", en Drake y Jaksic, 1999.
- Drake, Paul y Iván Jaksic (comps.), *El modelo chileno: democracia y desarrollo en los noventa*, Santiago, LOM, 1999.
- Fraser, Nancy, *Iustitia interrupta: reflexiones críticas desde la posición post-socialista*, Santa Fe de Bogotá, Siglo del Hombre/Universidad de los Andes, 1997.
- Frohman, Alicia y Teresa Valdés, "Democracy in the Country and in the Home: The Women's Movement. Chile", *Serie Estudios Sociales*, núm. 55, Santiago, FLACSO, 1993.
- Garretón, Manuel A., *Hacia una nueva era política: estudio sobre las democratizaciones*, Santiago, FCE, 1995.
- Gaviola, Edda, Eliana Largo y Sandra Palestra, "Si la mujer no está, la democracia no va", *Proposiciones*, 21, Santiago, Sur, 1992.
- , Ximena Jiles, Lorella Lopresti y Claudia Rojas, "Queremos votar en las próximas elecciones", *Historia del movimiento femenino en Chile 1913-1952*, Santiago, CEM, 1986.
- Grau, Olga, Francisca Pérez y Raquel Olea, *IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing 95: actores y discursos*, Santiago, La Morada, 1997.
- Guerrero, Elizabeth y Marcela Ríos, "El camino que lleva a la plaza: delineando el campo de acción feminista hoy", en *Reflexiones teóricas y comparativas*

- sobre los feminismos en Chile y América Latina, Santiago, Notas del Conversatorio, 1998, s. p.
- Guillaudat, Patrick y Pierre Mouterde, *Los movimientos sociales en Chile, 1973-1993*, Santiago, LOM, 1998.
- Guzmán, Virginia, Eugenia Hola y Marcela Ríos, *Interlocución entre Estado y sociedad en la implementación del plan de igualdad de oportunidades para las mujeres*, Santiago, CEM, 1999.
- Jaquette, Jane, "Los movimientos de mujeres y las transiciones democráticas en América Latina", en Magdalena León (comp.), *Mujeres y participación política. Avances y desafíos en América Latina*, Bogotá, TM, 1994.
- Jocelyn-Holt, Alfredo, *El Chile perplejo: del avanzar sin transar al transar sin parar*, Santiago, Planeta/Ariel, 1998.
- Keck, Margaret E. y Kathryn Sikkink, *Activists Beyond Borders*, Ithaca, Cornell University Press, 1998.
- Kirkwood, Julieta, *Ser política en Chile. Las feministas y los partidos políticos*, Santiago, FLACSO, 1986.
- Lechner, Norbert y Pedro Guell, "Construcción social de las memorias en la transición chilena", en Amparo Menéndez-Carrión y Alfredo Joignant (eds.), *La caja de Pandora: el retorno de la transición chilena*, Santiago, Planeta/Ariel, 1999.
- McAdam, D., J. McCarthy y M. Zald, *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
- Melucci, Alberto, "The Symbolic Challenge of Contemporary Movements", *Social Research*, vol. 52, núm. 4, 1985.
- , "El conflicto y la regla: movimientos sociales y sistemas políticos", *Sociológica*, vol. 10, núm. 28, 1995.
- , "La acción colectiva como construcción social", *Estudios Sociológicos*, vol. IX, núm. 26, 1991.
- Moulian, Tomas, *Chile actual: anatomía de un mito*, LOM y Universidad ARCIS, 1997.
- Raczynsky, Dagmar, Claudia Serrano y Carolina Rojas, "Concepciones sobre la noción de participación con que trabaja la institucionalidad pública y como se define el papel de la mujer", Santiago, Informe final, Consultoría para Sernam, 1999.
- Ríos, Marcela, *Socialización política y acción colectiva: organizaciones de pobladoras en Chile 1973-1993*, tesis de maestría, México, FLACSO, 1994.
- , "Institucionalización de las políticas de género y consolidación democrática: la experiencia chilena", ponencia presentada en el Congreso Anual de LASA, Guadalajara, 1997.
- y Patricia Aravena, *Temas y estrategias en torno a los cuales se organizan las mujeres en el ámbito público*, informe para Sernam, Santiago, Sernam, 1997.
- y Lorena Godoy, "El movimiento de mujeres en el Chile de hoy: actores sociales y transición a la democracia", proyecto de investigación, Santiago, CEM, 1999.

- Rossetti, Josefina, "Las mujeres y el feminismo", *Cuadernos del Círculo de Estudios de la Mujer*, Santiago, CEM, 1986.
- Saporta, Nancy, Marysa Navarro, Patricia Chuchryk y Sonia Álvarez, "Feminismos en América Latina: de Bogotá a San Bernardo", en Magdalena León (comp.), *Mujeres y participación política. Avances y desafíos en América Latina*, Bogotá, TM, 1994.
- Tarrés, María Luisa, "Perspectivas analíticas en la sociología de la acción colectiva", *Estudios Sociológicos*, núm. 30, vol. X, 1992.
- Valdés, Teresa y Marisa Weinstein, *Mujeres que sueñan: las organizaciones de pobladoras en Chile 1973-1990*, Santiago, FLACSO, 1993.
- Vargas, Virginia, *La lucha por los derechos y la autonomía desde feminismos latinoamericanos*, mimeo, 1998.
- Valenzuela, María Elena, "Las mujeres en la transición democrática", en FLACSO, *El difícil camino hacia la democracia en Chile, 1982-1990*, Santiago, Fondo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 1993.
- , "Las mujeres y el poder: la acción estatal desde una perspectiva de género en Chile", en *Reflexiones teóricas y comparativas sobre los feminismos en Chile y América Latina*, Notas del Conversatorio, Santiago, 1998.
- Valenzuela, Arturo y Samuel Valenzuela, "Party Oppositions Under the Chilean Authoritarian Regime", en A. Valenzuela y S. Valenzuela (comps.), *Military Rule in Chile: Dictatorship and Oppositions*, Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1986.